

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 25° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-27054-2018
CARATULADO : MAESTRANZA JOMA S.A./FISCO DE CHILE -
SEREMI SALUD METROPOLIATANA

Santiago, diecinueve de Agosto de dos mil diecinueve

VISTOS:

En folio 1 de la carpeta electrónica, compareció don FERNANDO JOSÉ MOYA RODRÍGUEZ, abogado, en representación de la sociedad MAESTRANZA JOMA S.A., ambos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos N° 1.373, oficina 604, comuna de Santiago, quien, en la representación investida, dedujo en juicio sumario una acción de reclamación en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD (SEREMI) DE LA REGIÓN METROPOLITANA, representada por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, representado éste, a su vez, por su presidenta doña MARÍA EUGENIA MANAUD TAPIA, abogada, todos éstos domiciliados en calle Agustinas N° 1.687, comuna de Santiago, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se reproducen a continuación:

Sostuvo que el organismo demandado dictó la Resolución Exenta N° 005293 fechada el 30 de Julio de 2018, notificada a su parte el día viernes 24 de agosto en curso, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición o reconsideración presentado por mi parte en contra de la Resolución N° 001988 de fecha 15 de marzo de 2018, en virtud de la cual se sancionó a su parte con un multa de 200 UTM (doscientas unidades tributarias mensuales).



Foja: 1

Señaló que en la Resolución Exenta N° 005293 de 30 de julio de 2018 rechazó el recurso de reposición interpuesto, ratificando la multa impuesta por la Resolución N° 001988, señalando que la parte sumariada no acompaña antecedentes ni medios probatorios que sustenten sus dichos en cuanto a las acciones de capacitación y prevención, ni acredita el procedimiento de trabajo seguro para el movimiento de vigas doble T, y que, en suma, la sumariada no aporta elementos de convicción que permitan a la Autoridad Sanitaria concluir que hay mérito para modificar lo ya resuelto.

Indicó que el hecho que motivó el sumario sanitario instruido, es un accidente del trabajo sufrido por el trabajador don Sergio Iván Sepúlveda Reyes, quien actualmente está totalmente recuperado y que también actualmente se encuentra prestando servicios laborales para su parte.

Manifestó que dicho accidente ocurrió el día 2 de octubre de 2017 y consistió en la atrición de una parte de su pierna por una viga metálica que estaba siendo movilizada por una grúa cuyo conductor era dirigido por las señales que el mismo señor Sepúlveda -en su calidad de "rigger"- daba al conductor de la misma, y este aprisionamiento generó lesiones en el trabajador señor Sepúlveda consistentes en contusiones severas, hematomas y luxofractura de tobillo derecho.

Señaló que el señor Sepúlveda fue trasladado de forma inmediata al centro de atención más cercano de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N° 16.744 - al cual está afiliado su parte, siendo dado de alta laboral el día 8 de marzo de 2018, y desde el día posterior ha reingresado a prestar servicios en la empresa reclamante, aunque en funciones de menor carga de esfuerzo físico, para facilitar su total adaptación y recuperación para la vida laboral.



Foja: 1

Refirió que una vez ocurrido el accidente, su parte dio cumplimiento a la norma del inciso 5º del artículo 76 de la Ley Nº 16.744, auto-suspensión que fue levantada casi de inmediato por la Autoridad Sanitaria, y con mucha posterioridad, esa misma Autoridad dictó la Resolución Exenta Nº 1644 de 23/07/2018 en virtud de la cual se ratificó la medida de alzamiento respecto de la auto-suspensión de los trabajos, dado que la Autoridad Sanitaria comprobó, según citó, “que la implementación de las medidas correctivas ejecutadas por la actividad controlaban la situación de riesgo que dio origen al accidente”.

Expresó que el “rigger” es un trabajador auxiliar o de apoyo a la labor de un operador de grúas, y cumple la tarea de apoyar y guiar al operador de la grúa mediante señales tanto sonoras como gestuales con las cuales entrega indicaciones y/o advertencias para la correcta ejecución de las maniobras de agarre, izaje, movimiento y/o traslado del equipo o vehículo y sus cargas mientras el operador se encuentra operando el mecanismo de elevación, desplazamiento o movimiento de la grúa.

Sostuvo que los fundamentos en los que la Autoridad Sanitaria basa su sanción son parciales y erróneos, en la medida que sólo se asila en lo consignado en el Acta de Constatación de Hechos, suscrita el 10 de Octubre de 2017 por don Juan Cordero Arenas, funcionario de la Secretaría de Salud de la Región Metropolitana, quien se constituyó ese día en visita de inspección.

En cuanto a la parcialidad, expuso que los antecedentes fundantes son

sólo las aseveraciones contenidas en la referida Acta, y que la Autoridad Sanitaria no consideró ni ponderó los antecedentes acompañados por su parte al momento de la visita de inspección (día 10/10/2017) y a la época de los descargos (día 25/10/2017), agregando que después de estas fechas, el día Lunes 30 de Octubre



Foja: 1

de 2017 la Autoridad Sanitaria les comunica verbalmente que se ha levantado la auto-suspensión de faenas por haberse demostrado la implementación de medidas de control que subsanaban la condición de riesgo.

Alegó que, no haber ponderado los elementos que se arguyeron en el curso de la visita de inspección como en la formulación de descargos, constituye un sesgo o una parcialidad de la Autoridad Administrativa que perjudica gravemente a su parte.

En cuanto al error de fundamentación alegado, estimó que, al basarse sólo en la referida Acta, la Autoridad Sanitaria incurre en errores de apreciación pues no consideró que su parte le acreditó: a) la existencia de capacitaciones al accidentado en su función de “rigger”, acciones de capacitación que se efectuaron con anterioridad al accidente, por cierto; b) la efectividad de la práctica diaria de instrucción al accidentado, la denominada “charla diaria” de seguridad; c) la circunstancia alegada en esa oportunidad que el trabajador actuó de modo descuidado y negligente, no obstante haber sido instruido en su función de manera específica; etc.

Afirmó que, de haber considerado o ponderado estos otros importantes antecedentes, la Resolución Exenta que se impugna habría sido de otro tenor, probablemente absolviendo a su parte o, a lo menos, aplicándole una sanción pecuniaria de inferior monto.

Por otro lado, alegó que Maestranza JOMA S.A., con una serie de documentos, más la declaración de sus trabajadores a cargo de materias de seguridad, su parte demostró que en forma previa al accidente y, desde luego, después de éste, ha mantenido una conducta que puede ser catalogada de responsable y diligente en materia de seguridad en el ambiente de trabajo y en sus operaciones, agregando que Maestranza JOMA S.A. ha dado pleno cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad en el trabajo, sean éstas legales y/o contractuales, y en especial con relación al deber general



Foja: 1

de todo empleador de proteger al trabajador, adoptando todas las medidas de protección que le son exigibles, tales como informar y capacitar respecto de los riesgos, capacitar respecto de la función específica a desarrollar por el trabajador señor Sepúlveda, entregarle los elementos de protección personal según su función y supervigilar su uso, todo ello con participación muy activa del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Hizo presente que Maestranza JOMA ha dado cabal cumplimiento a la primera y más relevante obligación de todo empleador respecto de un trabajador que recién se incorpora, cual es la obligación de inducción, que consiste en informar sobre los posibles riesgos del lugar de trabajo, enseñando y educando a los nuevos trabajadores sobre la situación de trabajo en general, con especial señalamiento de las formas seguras de trabajo para prevenir peligros en el lugar de trabajo.

Indicó que en la descripción del cargo de “rigger” expresamente se señala que el trabajador que cumple estas funciones debe “(...) indicar por el código de señales al operador de la grúa, los movimientos que debe realizar para posicionar los elementos que están siendo montados, especialmente cuando el operador no tiene visibilidad completa.”, y en concordancia con esa descripción de cargo, Maestranza JOMA ha dado cumplimiento, en su concepto, a su obligación de informar e instruir al trabajador señor Sepúlveda: a) A través de la denominada charla de inducción o charla de “hombre nuevo”, que es la forma concreta de cumplimiento del derecho a saber del trabajador, correlativo a la obligación de informar del empleador (capacitación DAS y capacitación ODI); b) Por medio del desarrollo de múltiples acciones de capacitación de manera constante y sostenida en el tiempo, como dan cuenta las innúmeras ocasiones en que el demandante fue capacitado y cuya documentación se exhibió en la visita de inspección; c) Por medio la práctica habitual, consistente en charlas de seguridad - tanto charlas integrales o de mayor extensión



Foja: 1

como charlas diarias de 5 minutos -; d) Especialmente por medio de la capacitación específica que se hizo al actor sobre prevención de riesgos en la operación de grúas horquilla o maquinaria pesada, curso de 2 horas de capacitación en que el actor participó junto a los “rigger”, con 100% de asistencia y que aprobó con evaluación del 75% también (curso impartido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción).

Por otra parte, señaló que la Resolución impugnada -al hacer suya y ratificar la Resolución que le antecede y que le sirve de fundamento- refieren como infringidas las normas de los artículos 3º y 37 del Decreto Supremo Nº 594/1999 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, alegando que, sin embargo, ello no es efectivo, pues, en su concepto, Maestranza JOMA ha dado cumplimiento a estas normas, tanto respecto del señor Sepúlveda como en relación con los restantes trabajadores - propios y ajenos o sub contratados - como seguidamente se indica: a) En relación con el artículo 3º, que citó, sostuvo que Maestranza JOMA S.A. mantiene y permanentemente ha mantenido los lugares de trabajo en las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores (dependientes directos) o de trabajadores contratistas, prueba de lo cual es que se exige a las empresas especializadas que prestan servicios de grúas (sea horquilla o plumas o grúas de mayor capacidad de levante) que sus operadores de grúas cumplan con las normas vigentes en cuanto a capacitación, que haya uso efectivo de elementos de protección personal, respeto a las normas de seguridad en el trabajo, etc.; b) En relación con el artículo 37, que citó, aseguró que Maestranza JOMA S.A. ha dado y actualmente da cumplimiento a todas y cada una de estas regulaciones de seguridad, y así lo acreditó documentalmente ante el Inspector señor Cordero Arenas el día de la visita de inspección (10/10/2017) -quien personalmente pudo observar el referido cumplimiento-, y ante la Autoridad Sanitaria en la citación a descargos



Foja: 1

(25/10/2017), pero desgraciadamente el funcionario señor Cordero Arenas omite en su informe o Acta de Constatación de Hechos todo lo anterior, lo que atenta contra el derecho de defensa de su parte.

A su turno, alegó que no hay dolo o culpa en el actuar de Maestranza JOMA S.A. y, al contrario, hubo una actuación negligente o descuidada del trabajador señor Sepúlveda, citando jurisprudencia al efecto, agregando que su parte, en su calidad de empleadora del señor Sepúlveda, adoptó y ha adoptado todas las medidas de prevención y cuidado necesarias para que el riesgo de ocurrencia de accidentes sea nulo, y la adopción de estas medidas naturalmente disminuye la posibilidad de ocurrencia de siniestros, pero no obsta a que pueda ocurrir un accidente, como lo es el caso del lamentable hecho que afectó al señor Sepúlveda el día 2 de Octubre de 2017, en el cual –afirmó- el trabajador señor Sepúlveda, al menos, se expuso imprudentemente al daño, citando nuevamente jurisprudencia.

Como antecedente nuevo, argumentó que el trabajador señor Sepúlveda, quien aún mantiene contrato de trabajo vigente con la Maestranza JOMA S.A., ha demandado laboralmente a su parte solicitando indemnización de perjuicios, pero ocurre que en esta causa el trabajador señor Sepúlveda Salinas absolvió posiciones, reconociendo y confesando ante el Tribunal que actualmente continúa prestando servicios para Maestranza JOMA S.A., a la que llega movilizándose en su bicicleta; que efectivamente ha prestado servicios como “rigger” para su Empresa y que ha sido capacitado reiteradamente en esa función; que al día del accidente llevaba más de 11 meses de trabajo continuo en la misma función; que para desarrollar esta función se les realiza una charla diaria de seguridad; que en esa función es él y no otra persona quien dirige el trabajo del gruelero; que en esta función es él y no otra persona quien acomoda, engancha, estiba y mueve alrededor de 500 vigas T por mes; que tiene un pito para hacer señales sonoras al dirigir las maniobras de estiba, traslado, desestiba y correcto acopio de vigas u otros



Foja: 1

materiales; y reconoce que además de las señales sonoras se hacen señales físicas que incluso explicó al Magistrado de la causa.

Como conclusión, estimó que, conforme lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, por medio de la presente Reclamación judicial y como petición principal solicita que la multa de 200 UTM impuesta a su parte sea dejada sin efecto en forma absoluta, puesto que su parte derechamente no incurrió en las infracciones acusadas ni tuvo responsabilidad en el accidente del trabajo que dio origen a tal multa, y subsidiariamente, que la multa de 200 UTM impuesta a su parte sea rebajada sustancialmente a sólo el 10% de ella, esto es, a sólo 20 UTM, por estimar que el accionar de su parte, Maestranza JOMA S.A., ha sido del todo diligente y, por el contrario, el accionar descuidado, negligente y carente de sentido de auto-protección del trabajador señor Sepúlveda Salinas originó el accidente del trabajo de autos.

PETITORIO DEL RECLAMO: Solicitó que, en definitiva, se deje sin efecto en forma absoluta la multa ya singularizada en el cuerpo de la reclamación, esto es, la aplicada por Resolución Exenta N° 001988 de 15 de Marzo de 2018, ratificada por la Resolución Exenta N° 005293 de 30 de Julio de 2018, con costas; y, **en subsidio**, que se rebaje la multa reclamada a sólo el 10% de la misma, esto es, a sólo 20 UTM, o cualquier cifra que prudencialmente fije el tribunal, pero que sea muy menor a las 200 UTM a la cual fue sancionada su parte, con costas.

En folio 10, consta el emplazamiento de la parte reclamada.

En folio 13, se celebró la audiencia de contestación y conciliación, con la asistencia de los apoderados de ambas partes, oportunidad en la cual la reclamada contestó el libelo dirigido en su contra, mediante minuta escritura agregada en folio 12, en la cual solicitó el rechazo total del mismo, con costas, en virtud de los fundamentos que se reproducen a continuación:



Foja: 1

En cuanto a los antecedentes de hecho que motivaron la aplicación de la multa, controvirtió la versión de los hechos en que se funda el reclamo y las consecuencias jurídicas que de éstos la reclamante hace derivar, señalando que con fecha 10 de octubre de 2017, funcionario fiscalizador de la Seremi de Salud R.M. se constituyó en visita de emergencias en dependencias de la reclamante ubicadas en Empresario Juan Luis Contreras Madrid, N° 0525, comuna de San Bernardo, donde con fecha 02 de octubre de 2017 se produjo el accidente laboral grave que afectó al trabajador Sr. Sergio Iván Sepúlveda Salinas quien, en el desempeño de sus labores de apoyo de tareas de movimiento de vigas, sufrió el atrapamiento de sus pies al volcarse una viga doble T de 1.600 kilos y 19 metros, expresando que el volcamiento de la viga se produjo debido a que una de las garras de la grúa que debía sujetarla para la realización de la maniobra de izaje no quedó correctamente afianzada, por lo que se produjo su volcamiento atrapando al Sr. Sepúlveda por sus extremidades inferiores, produciéndole fractura de tobillo y rotura de ligamentos del pie izquierdo y de cuádriceps, ante lo cual el trabajador fue rescatado por sus compañeros y, posteriormente, trasladado al centro de atención correspondiente de la Cámara Chilena de la Construcción.

Refirió que en el acta levantada por el funcionario de la Seremi de Salud R.M con ocasión de la visita inspectiva se constataron los siguientes hechos, según citó: “1. No se cuenta con procedimiento de trabajo para el movimiento de vigas doble T. 2. No se acredita capacitación por parte del accidentado respecto de la tarea de movimiento de vigas doble T. 3. No se cuenta con estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar las tareas y movimientos de carga.”, a causa de lo cual el representante legal de la empresa sumariada fue citado a formular descargos, compareciendo éste en la fecha indicada y presentando sus descargos cuyo



Foja: 1

contenido, en lo fundamental, coincide con el de la presente reclamación.

Expuso que con fecha 15 de marzo de 2018, se dictó sentencia por Resolución Exenta N° 1988 que, en base a los antecedentes reunidos en el sumario sanitario, tuvo por infringido lo dispuesto en los artículos 3 y 37 del Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por el D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud y aplicó a la sumariada una multa ascendente a UTM 200.

Enseguida, sostuvo que las alegaciones de la reclamante no desvirtúan la existencia de las infracciones, pues en la reclamación judicial la empresa no aporta ningún antecedente que desvirtúe los hechos constatados en el sumario sanitario, ni aporta prueba que desmienta lo señalado en el acta de fiscalización, agregando que los hechos fueron debidamente ponderados, lo que se desprende de la sola lectura de la resolución sancionatoria, además de que los descargos de la reclamante fueron valorados adecuadamente, indicando que la Seremi efectuó un análisis de las alegaciones efectuadas por la reclamante y los elementos de convicción aportados, y al evaluarlos consideró que no debía eximirla de responsabilidad en los hechos imputados.

Afirmó que lo que la reclamante cuestiona directamente es la motivación del acto administrativo, motivación que se ha cumplido plenamente, en su opinión, citando doctrina sobre el particular y los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880, agregando que basta que la motivación sea sucinta y suficiente para que se puedan conocer los motivos, no que se recojan todos y cada uno de los antecedentes que formaron parte del íter procedimental que concluyó con el acto administrativo de término, y que, en otras palabras, la motivación se cumple, “con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho”.



Foja: 1

Por otro lado, alegó que, en atención al carácter de plena prueba del acta levantada por el ministro de fe, la carga de la prueba corresponde a la reclamante, citando el artículo 166 del Código Sanitario en cuanto ha establecido el carácter de plena prueba del acta levantada por funcionario competente, respecto de la infracción a las leyes y reglamentos sanitarios que en ella se consignan y que fuera debidamente comprobada por el funcionario fiscalizador, citando además el artículo 156 inciso segundo del mismo cuerpo legal, en cuanto confiere el carácter de Ministro de Fe al funcionario que practique la diligencia señalada.

También citó el artículo 171 del Código Sanitario en cuanto dispone que el tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario instruido al efecto en conformidad a las normas del Código Sanitario; si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios; y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida.

Refirió que los antecedentes constatados por el Ministro de fe y no desvirtuados por la sumariada constituyen efectivamente una infracción a lo dispuesto en los artículos 3 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D.S. 594/99 del Ministerio de Salud, lo que se sancionó conforme a la multa establecida en la parte resolutive y que corresponde a 200 UTM.

Expuso que, en consecuencia la carga de la prueba recae en la demandante, debiendo ella acreditar que los hechos que motivaron la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario instruido al efecto en conformidad a las normas del Código Sanitario; que tales hechos no constituyen una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios; y que la sanción aplicada no corresponde a la infracción cometida.



Foja: 1

Por otra parte, alegó que la sentencia fue dictada con base a los antecedentes aportados al sumario, y no incurre en error, ni en falta de imparcialidad, pues basta con leer la parte considerativa de la referida sentencia para verificar que se funda en haberse constatado, por una parte, que el Procedimiento de Trabajo Seguro exigido se refiere a aquel necesario para el movimiento de vigas doble T, que era la función en que se desempeñaba y, por otra, que la empresa no contaba con un estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar las tareas y los movimientos de carga, omisiones que -como lo expresa la sentencia sanitaria- provocó la indefensión del trabajador ya que, según citó, "...puede establecerse el desconocimiento de los riesgos de su actividad y, asimismo, que ignoraba la forma correcta de realizar su trabajo [...]" agregando que, de la existencia de un estándar de señalización o comunicación no verbal, "[...] pudo contribuir eficazmente a salvaguardar su integridad física [...]".

Enseguida, citó el artículo 3° del D.S. N° 594/99, estimando que en el caso concreto de que se trata, la exigencia de contar con procedimiento de trabajo seguro para el movimiento de vigas doble T y de contar con un estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar las tareas y los movimientos de carga, se encuentran comprendidos en las obligaciones que la normativa vigente establece para la empresa, en atención a lo cual la sentencia sanitaria determinó la concurrencia de infracción a la normativa que señala y resuelve aplicar a la empresa Maestranza Joma S.A, la multa cuestionada.

A su turno, alegó que la sanción reclamada corresponde a la infracción y resulta proporcional a ella, pues se ajusta a lo dispuesto por el artículo 174 del Código Sanitario, atendido que por una parte, la empresa infringió lo dispuesto en los artículos 3 y 37 del D.S N° 594/99 del Ministerio de Salud y, por otra parte, considerando que el monto máximo de multa aplicable en conformidad a la ley asciende a 1.000 UTM, de manera que la que en definitiva se aplicó en la especie,



Foja: 1

alcanza una mínima proporción del máximo establecido, por lo que su monto se ajusta perfectamente a la entidad de la infracción cometida.

En cuanto a la petición subsidiaria de rebaja de la multa, alegó que el artículo 174 del Código Sanitario, brinda a la autoridad sanitaria un rango de aplicación de multa que fluctúa entre un mínimo de 1/10 (sic) UTM y un máximo de 1.000 UTM, otorgando así un margen de discrecionalidad para decidir el contenido preciso de la multa, dependiendo finalmente la cuantía de la multa de la apreciación que se realice sobre cuestiones tales como la entidad, número y gravedad de las infracciones, de acuerdo con el mérito de los antecedentes que figuran en el sumario sanitario.

En este sentido, hizo presente que una cuestión controvertida en doctrina dice relación con la extensión del control jurisdiccional en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, atendido que este tipo de control puede sólo abarcar los aspectos de juridicidad que se encuentren comprometidos, pero nunca a aquellos de oportunidad o mérito, pues éstos son elementos que integran la esencia de la función administrativa cuyo ejercicio corresponde única y exclusivamente a la Administración del Estado, según lo ordena el principio de separación de poderes, y así las cosas, la determinación precisa que realiza la autoridad administrativa respecto de la multa dentro del rango establecido por el ordenamiento jurídico no es otra cosa que el ejercicio de la discrecionalidad que el legislador le ha otorgado para establecer el contenido y entidad del acto sancionatorio, de lo cual deriva que, en principio, el órgano jurisdiccional no puede dejar sin efecto o modificar el acto administrativo sancionatorio puesto que ello implicaría ejercer función administrativa, a menos que de los antecedentes incorporados en autos, aparezca con claridad y evidencia, que la autoridad sanitaria ha incurrido en una arbitrariedad, cuestión que no ocurre en el caso de marras, de manera que la discrecionalidad administrativa puede ser objeto de control jurisdiccional sólo en aquellos casos en que importe un



Foja: 1

comportamiento arbitrario o manifiestamente desproporcionado, ilógico o absurdo, en relación con los antecedentes de hecho comprobados, es decir, en la medida en que la discrecionalidad administrativa vulnere el principio de legalidad, agregando que los criterios que fueron estimados por la autoridad para fijar el monto de la multa, consideraron las deficientes condiciones de seguridad sanitarias y ambientales constatadas en la empresa fiscalizada, las que constituyeron un riesgo para la vida e integridad física de sus trabajadores, citando jurisprudencia al efecto.

PETITORIO DE LA CONTESTACIÓN: solicitó el rechazo total del reclamo, con costas.

En la misma audiencia referida, y previo llamado a las partes, no se produjo conciliación.

En folio 18, se dictó la interlocutoria de prueba, notificada a las partes en folios 20 y 21, contra la cual no se interpusieron recursos.

En folio 50, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que en la audiencia de folio 32, la reclamada opuso tacha contra el testigo de la reclamante, don ALEX GUILLERMO FERMÍN NAVARRO TOLEDO, individualizado en folio 22, en virtud de la causal del N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, alegando que de su declaración se evidencia que es un trabajador dependiente de la persona que exige su testimonio.

SEGUNDO: Que la reclamada, evacuando el respectivo traslado, solicitó el rechazo de la tacha, con costas, alegando que la institución de las tachas se encuentra en desuso e incluso es inaplicable por inconstitucional, agregando que el hecho que los testigos sean dependientes de la parte que los presenta a declarar, no impide su



Foja: 1

conurrencia porque si han tenido participación en los hechos, necesariamente se hace indispensable su testimonio, y además, los trabajadores dependientes tienen la suficiente independencia para declarar imparcialmente, por cuanto los derechos otorgados por las leyes labores son una garantía suficiente para que puedan declarar libres de presiones.

TERCERO: Que la causal en comento, contenida en el artículo 358 N° 5 del Código del ramo, resulta aplicable a "*Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio*", esto es, personas que mantienen con la parte que los presenta, un vínculo laboral que reúne los requisitos de habitualidad en la prestación de los servicios, retribución pecuniaria de los mismos, y la subordinación y dependencia propias de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, circunstancias que, a partir de la declaración del testigo impugnado, no se desprenden totalmente que concurren en él, dado que el testigo solo ha respondido que desempeña funciones dentro de la empresa Maestranza (sic) desde el año 2008 a la fecha, sin que la parte interesada en que se declare su inhabilidad, le haya formulado mayores preguntas relativas a la configuración fáctica de la causal en cuestión, ni aportado mayores antecedentes con el mismo fin, siendo carga suya, no pudiendo el tribunal entrar suplir dicha inactividad procesal de la incidentista, o presumir la efectividad de la causal con el solo mérito de tales antecedentes que esta juzgadora estima insuficientes para acreditar la inhabilidad en cuestión, toda vez que ello implicaría quebrantar la obligación de imparcialidad que pesa sobre esta magistratura, motivos por los cuales se **desestimará** la tacha en análisis, con costas.

CUARTO: Que en la misma audiencia de folio 32, la reclamada opuso tacha contra el testigo de la reclamante, don DIEGO ALONSO GONZÁLEZ ORTEGA, individualizado en folio 22, en virtud de la causal del N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil,



Foja: 1

alegando que de su declaración se evidencia que es un trabajador dependiente de la persona que exige su testimonio.

QUINTO: Que la reclamada, al evacuar el respectivo traslado, solicitó el rechazo de la tachá, con costas, alegando que la institución de las tachas se encuentra en desuso e incluso es inaplicable por inconstitucional, agregando que el hecho que los testigos sean dependientes de la parte que los presenta a declarar, no impide su concurrencia porque si han tenido participación en los hechos, necesariamente se hace indispensable su testimonio, y además, los trabajadores dependientes tienen la suficiente independencia para declarar imparcialmente, por cuanto los derechos otorgados por las leyes labores son una garantía suficiente para que puedan declarar libres de presiones.

SEXTO: Que la causal en comento, contenida en el artículo 358 N° 5 del Código del ramo, resulta aplicable a *“Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”*, esto es, como ya se dijo en el motivo tercero, a personas que mantienen con la parte que los presenta, un vínculo laboral que reúne los requisitos de habitualidad en la prestación de los servicios, retribución pecuniaria de los mismos, y la subordinación y dependencia propias de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, circunstancias que, a partir de la declaración del deponente objetado, no se advierte que concurran a su respecto, dado que el testigo solo ha respondido, en lo pertinente, que es prevencionista de riesgos de la empresa (sic) y que asumió ese cargo después de que el prevencionista anterior dejara de pertenecer a la misma, agregando que es encargado del área de seguridad y asesora a dicha área, sin que, como también se dijo en el apartado tercero, la parte interesada en que se declare su inhabilidad, le haya formulado mayores preguntas relativas a la configuración fáctica de la causal en cuestión, ni aportado mayores antecedentes con el mismo fin, siendo carga suya, no pudiendo el tribunal entrar suplir dicha inactividad procesal de



Foja: 1

la incidentista, o presumir la efectividad de la causal con el solo mérito de tales antecedentes, que se estiman insuficientes para comprobar la inhabilidad en cuestión, toda vez que ello implicaría transgredir la obligación de imparcialidad que pesa sobre el tribunal, motivos por los cuales se **desestimar**á la tach

II.- EN CUANTO AL FONDO:

SÉPTIMO: Que don FERNANDO JOSÉ MOYA RODRÍGUEZ, en representación de la sociedad MAESTRANZA JOMA S.A., dedujo en juicio sumario una acción de reclamación en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD (SEREMI) DE LA REGIÓN METROPOLITANA, representada por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, representado éste, a su vez, por su presidenta doña MARÍA EUGENIA MANAUD TAPIA; y, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se reproducen en la parte expositiva de esta sentencia, solicitó que, en definitiva, se deje sin efecto en forma absoluta la multa aplicada por Resolución Exenta Nº 001988 de 15 de Marzo de 2018, ratificada por la Resolución Exenta Nº 005293 de 30 de Julio de 2018, con costas; y, en subsidio, que se rebaje la multa reclamada a sólo el 10% de la misma, esto es, a sólo 20 UTM, o cualquier cifra que prudencialmente fije el tribunal, pero que sea muy menor a las 200 UTM a la cual fue sancionada su parte, con costas.

OCTAVO: Que la reclamada contestó la acción dirigida en su contra y, en virtud de los fundamentos que también fueron reproducidos en la parte expositiva del fallo, solicitó el rechazo total de la misma, con costas.

NOVENO: Que, del análisis del contenido de los escritos que componen la etapa de discusión, se establece que es un hecho no controvertido entre las partes, la efectividad de que la autoridad reclamada instruyó un sumario sanitario en contra de la reclamante, dado que, a raíz de un accidente laboral sufrido por un trabajador de



Foja: 1

esta última, un funcionario fiscalizador de la autoridad reclamada se constituyó en visita de inspección a las dependencias de la empresa reclamante, y constató la inexistencia de procedimiento de trabajo para el movimiento de “vigas doble T”, como también que no se acreditó capacitación para el accidentado respecto de la tarea de movimiento de “vigas doble T” y que la sumariada no cuenta con estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar las tareas y movimientos de carga, luego de lo cual, previa comparecencia de la reclamante a formular descargos y acompañar documental al sumario, la autoridad reclamada dictó la resolución exenta N° 1988, de 15 de marzo de 2018, que tuvo por efectivas las infracciones constatadas y determinó la aplicación a la sumariada de una multa de 200 unidades tributarias mensuales, decisión que fue objeto de un recurso administrativo de reconsideración por parte de la sumariada, el que fue desestimado en la resolución que se impugna en estos autos, la cual confirmó la multa en cuestión.

DÉCIMO: Que, en definitiva, del examen del proceso se advierte que la controversia ventilada en autos, en cuanto a los hechos, radica en determinar la existencia de hechos o circunstancias que desvirtuarían lo certificado en el sumario sanitario referido por la reclamante y que motivó la sanción impuesta a ésta; la efectividad de que el contenido del acta levantada por la autoridad sanitaria contiene hechos que constituyen efectivamente infracciones a las leyes o reglamentos sanitarios; y hechos o circunstancias que tornarían improcedente o desproporcionada la multa impuesta a la demandante.

UNDÉCIMO: Que la reclamante, a fin de comprobar sus dichos, incorporó al proceso los siguientes medios de prueba:

I.- PRUEBA INSTRUMENTAL acompañada en folios 1, 26, 36 y 37, la que consiste en los siguientes documentos, que no fueron objetados por su adversaria:



Foja: 1

1. Copia de Resolución Exenta N° 001988, de fecha 15 de Marzo de 2018, emitida por la reclamada.
2. Copia de Resolución Exenta N° 016444 de 23 de Julio de 2018, emitida por la reclamada.
3. Copia de Resolución N° 005293 de 30 de Julio de 2018, emitida por la reclamada.
4. Dispositivo pendrive que contiene dos archivos de audio, guardado en custodia bajo el N° 4577-2019, respecto de los cuales se decretó en folio 35, la audiencia del artículo 348 bis del Código del ramo, la cual se realizó en folio 45, con la asistencia de los apoderados de ambas partes, en la cual se procedió a la percepción de los archivos en cuestión, consistentes en: (a) archivo de audio con declaración de Sergio Sepúlveda Salinas, en audiencia de juicio; (b) archivo de audio con declaración del representante legal de Maestranza Joma S.A., Iván Matesic, en audiencia de juicio.
5. Copia de contrato de trabajo don Sergio Sepúlveda Salinas, más sus anexos y su descripción de cargo, y documentos de entrega de elementos de protección personal EPP, de realización de capacitación inicial (charla de hombre nuevo o inducción), y de charlas diarias de seguridad.
6. Copia de sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 4 de Marzo de 2019, en el ingreso Rol N° 626/2018,
7. Copia de sentencia de reemplazo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 04 de Marzo de 2019, en Rol N° 626/2018, que acoge dispone que se rechaza la demanda de indemnización de perjuicio



Foja: 1

deducida por don Sergio Sepúlveda Salinas, en que se puede claramente leer que “(...) luego de haber analizado toda la prueba de manera sistemática, de acuerdo a lo ordenado por las normas citadas en el considerando segundo de esta sentencia de reemplazo, resultando particularmente relevante lo depuesto por el propio actor, se debe concluir que la empresa adoptó todas las medidas idóneas para el resguardo de la salud de los trabajadores y que fue el demandante quien se expuso de manera imprudente al riesgo, por lo que se rechazará la demanda en todas sus partes.

8. Registros de Charla Integral de Seguridad con asistencia del accidentado don Sergio Sepúlveda Salinas, entre el 03/04/2017 y el 03/10/2017.
9. Dispositivo pendrive que contiene un archivo de vídeo, guardado en custodia bajo el N° 4731-2019, respecto de los cuales se decretó en folio 41, la audiencia del artículo 348 bis del Código del ramo, la cual se realizó en folio 45, con la asistencia de los apoderados de ambas partes, en la cual se procedió a la percepción del archivo en cuestión, consistente en un vídeo del trabajador accidentado, presentado como prueba nueva en audiencia de juicio de causa RIT O-7-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

II.- PRUEBA TESTIMONIAL. Ofrecida en folio 22, se tuvo presente en folio 24, y se rindió en la audiencia de folio 32, con la asistencia de los apoderados de ambas partes y los siguientes testigos individualizados en la nómina de folio 22, quienes, previamente juramentados en forma legal, declararon lo que se reseña a continuación:



Foja: 1

1. Don ALEX GUILLERMO FERMIN NAVARRO TOLEDO, técnico en construcciones metálicas, cuya inhabilidad opuesta a su respecto fue desestimada en el motivo tercero, declaró que existe un procedimiento de trabajo, un procedimiento de señas y existe registro de capacitación para la realización de las tareas a desempeñar, refiriendo que, al asumir sus funciones el trabajador accidentado, se le entregó un documento sobre los riesgos de sus tareas y también sus funciones, además de sus elementos de protección personal, y se pasó como ayudante de un “rigger” experimentado, que va a ser su guía para desarrollar dicha tarea, quien hace acompañamiento del trabajador para ver las distintas maniobras que se realizan de izaje al interior de la maestranza, y está en ese proceso durante un mes, añadiendo que todos los días se realizan charlas de capacitación que duran entre 5 a 10 minutos, y este trabajador mostraba la experticia y conocimientos de las maniobras que él realizaba. Señaló el deponente que es jefe de taller de Maestranza Joma y fue el que contrató a Sergio Sepúlveda, y lo capacitaron e instruyeron en la tarea a desarrollar. Indicó que, ocurrido el accidente, detuvieron la operación del sector hasta que se les indicara que podían volver a su labor, y posteriormente se realizó una re inducción a todos los operadores de grúa y “riggers”, en la que se les reforezaron todas las indicaciones dadas en los procedimientos existentes. Declaró que el trabajador accidentado tuvo un entrenamiento de un mes en terreno, moviendo las denominadas “vigas T”, en el cual se realizaron distintos tipos de maniobras con dicho elemento, añadiendo que el trabajador tenía experiencia en una empresa similar a la suya, que se llama Maestranza Eiffel, en la cual desarrollaba la labor de Rigger. Señaló que el



Foja: 1

procedimiento de instrucción más las operaciones en terreno durante su entrenamiento son genéricos, debido a los distintos materiales que se mueven al interior de Maestranza Joma, y posteriormente se realizó un procedimiento específico para el movimiento de “vigas doble T”.

2. Don DIEGO ALONSO GONZÁLEZ ORTEGA, ingeniero en prevención de riesgos, declaró que existe un procedimiento de trabajo que está incorporado al sistema de gestión en seguridad de la empresa, sumado a que al ingreso del trabajador de marras se cumplió con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 40, que es la obligación de informar al trabajador u hombre nuevo las tareas que va a realizar y los riesgos a que está expuesto, además de las medidas de control que debe adoptar para controlar dichos riesgos, agregando que este trabajador viene con experiencia como “rigger” de empresas anteriores, y por eso fue contratado por su empresa, ya que en dicho puesto se solicita experiencia laboral, añadiendo que, aparte de mencionarle los riesgos, tienen un “rigger” capacitador, quien, a lo menos, se toma de tres semanas a un mes para enseñarle el trabajo operativo al trabajador, y también se cuenta con un programa de capacitaciones, donde están incorporadas dichas actividades de forma rutinaria dentro de la empresa, además de lo cual se llevan a cabo charlas de cinco minutos donde se estipulan las labores que se van a ejecutar durante el día, planificando los riesgos y dando las medidas de control que haya que adoptar para el trabajo diario. Refirió que la primera capacitación es el lenguaje no verbal que tiene que adoptar el “rigger” y el operador de grúa horquilla, capacitaciones en traslado y acopio de estructuras metálicas, y capacitaciones de buenas



Foja: 1

prácticas con respecto al trabajo o a la tarea de izajes estructural, y esas son las capacitaciones específicas propias del cargo.

DUODÉCIMO: Que la reclamada, a fin de acreditar lo correspondiente, produjo en el pleito la PRUEBA INSTRUMENTAL acompañada en folios 12 y 31, la que consiste en los copia de expediente de Sumario Sanitario N° 4107 del año 2018, instruido por la reclamada en contra de la reclamante, el cual no fue objetado por esta última.

DECIMOTERCERO: Que, del análisis del contenido de las probanzas rendidas en autos, reseñadas en los motivos undécimo y duodécimo, consistentes en: (a) instrumental legalmente acompañada por cada una de las partes, separadamente, no objetada por su respectiva adversaria, y valorada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, y 1700 y 1702 del Código Civil; y (b) testimonial rendida en forma legal por la reclamante, cuyas tachas opuestas por su adversaria fueron desestimadas en los motivos tercero y sexto, y valorada de conformidad con lo prescrito en los artículos 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil; se tienen por acreditados los siguientes hechos

A) Que con fecha 10 de octubre de 2017, el funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, don Juan Cordero Arenas, se constituyó en visita de inspección en dependencias de la empresa Maestranza Joma S.A., ubicadas en calle Empresario Juan Luis Contreras Madrid N° 0525, comuna de San Bernardo, a raíz del accidente grave del trabajador don Sergio Iván Sepúlveda Salinas, operador multifuncional desde el 4 de noviembre de 2016, constatando el fiscalizador que el hecho ocurrió a las 2 de octubre de 2017 alrededor de las 9:30 horas, y recibió



Foja: 1

maniobras de rescate por parte de sus compañeros, tras sufrir el atrapamiento de sus pies al caerse una “viga doble T” de 1.600 kilos, mientras se realizaban tareas de movimiento de la viga y una de las garras no quedó correctamente afianzada, y en la maniobra de izaje con grúa, sin que el trabajador se retirara del lugar, y pensando que un gesto con la mano realizado por el accidentado daba la instrucción de levantar, el operador de la grúa procedió a levantarla, volcándose la pieza sobre el trabajador. El fiscalizador constató además que la empresa notificó del accidente y suspendió sus actividades, y señaló que, mediante el acta levantada al efecto, al momento de la inspección, se ratifica la medida de suspensión para el movimiento de “vigas doble T” en el lugar de ocurrencia del accidente, y se constata que: (1) no se cuenta con procedimiento de trabajo para el movimiento de “vigas doble T”, (2) no se acredita capacitación por parte del accidentado respecto de la tarea de movimiento de “vigas doble T”, y (3) no se cuenta con estándar de señalización y comunicación no verbal para coordinar las tareas y movimientos de carga; dejando, finalmente, citado al representante de la empresa para concurrir a formular sus descargos ante la autoridad en referencia, el día 25 de octubre de 2017, dando así, inicio al sumario sanitario N° 4107-2017 instruido por la SEREMI en referencia, en contra de la reclamante de estos autos.

B) Que, en el sumario sanitario en comento, la empresa MAESTRANZA JOMA S.A. formuló por escrito sus descargos, con fecha 25 de octubre de 2017, presentación a la que acompañó, en lo pertinente, los siguientes documentos, todos ellos contenidos dentro de la



Foja: 1

instrumental referida en el apartado duodécimo, no objetada por la reclamante:

b.1) Seis hojas de registro de asistencia a charlas integrales, de fechas, respectivamente, 4 de septiembre de 2017, 7 de agosto de 2017, 31 de julio de 2017, 18 de julio de 2017, 12 de junio de 2017 y 22 de mayo de 2017, todas las cuales se encuentran suscritas por Luis Barrera en calidad de supervisor e indican la asistencia del trabajador Sergio Sepúlveda, trabajador accidentado; documentos cuyas fechas no coinciden con la que consignan las actas de charla integral a las que acompañan, las cuales se encuentran datadas, respectivamente, los días 1 de septiembre de 2017, 6 de agosto de 2017, 1 de agosto de 2017, 10 de julio de 2017, 5 de junio de 2017 y 29 de mayo de 2017.

b.2) Quince actas de “charla integral” y quince hojas de asistencia que las acompañan y que indican la asistencia del trabajador Sergio Sepúlveda; todas ellas, respectivamente –tanto las actas como las hojas de asistencia-, de fechas 2 de octubre de 2017, 14 de agosto de 2017, 24 de julio de 2017, 10 de julio de 2017, 3 de julio de 2017, 5 de junio de 2017, 27 de junio de 2017, 19 de junio de 2017, 15 de mayo de 2017, 17 de abril de 2017, 10 de abril de 2017, 3 de abril de 2017, 20 de marzo de 2017, 15 de marzo de 2017 y 13 de marzo de 2017. En dichas actas de “charla integral”, a las que asistió el trabajador en cuestión, en las fechas señaladas, se trataron, en lo pertinente, temas relativos a no transitar por debajo de las cargas suspendidas de grúas horquilla (charlas de 2 de octubre de 2017, 14 de agosto de 2017, 24 de julio de 2017, 10 de julio de 2017, 3 de julio de 2017, 5 de junio de 2017, 27 de junio de 2017, 19 de junio de 2017, 15 de mayo de 2019, 17 de abril de 2017, 10 de abril de 2017, 3 de abril de 2017, 20 de marzo de 2017, 17 de marzo de 2017 y 13 de marzo de 2017), y a que todo movimiento de los puente grúas se debe realizar con el máximo de precaución para evitar golpes y daños a terceros (charlas de 14 de agosto de 2017, 24 de julio de 2017, 10 de



Foja: 1

julio de 2017, 3 de julio de 2017, 5 de junio de 2017, 27 de junio de 2017, 19 de junio de 2017 y 15 de mayo de 2019).

b.3) Un certificado de desarrollo de capacitación ocupacional emitido por Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, relativo a que el trabajador Sergio Sepúlveda Salinas participó en un curso de capacitación en prevención de riesgos en la operación de grúas horquilla o maquinaria pesada, llevado a cabo en dependencias de Maestranza Joma S.A. el 2 de septiembre de 2017, cuya duración fue de dos horas hombre instrucción, y cuyo resultado para el trabajador fue “aprobado”.

b.4) Set de documentos relativos a la obligación de informar respecto del trabajador accidentado, derecho a saber del trabajador accidentado y charlas diarias de 5 minutos (28 páginas).

c) Que, en definitiva, en el sumario en referencia, se dictó por parte de la SEREMI de Salud instructora del mismo, la resolución exenta N° 1988 de fecha 15 de marzo de 2018, la cual refirió el contenido del acta señalada en el literal (A) del presente fundamento, y a los descargos y documentos presentados por la sumariada en dicho procedimiento administrativo, disponiendo, en definitiva, y en lo pertinente, *“Que, analizadas debidamente las alegaciones efectuadas y los elementos de convicción allegados a este expediente, esta Autoridad Sanitaria concluye que la sumariada no logra desvirtuar los cargos formulados para eximirse de la responsabilidad que le cabe en los hechos materia de este sumario, toda vez que: No se acredita Procedimiento de Trabajo Seguro para el movimiento de vigas doble T y, consecuentemente, el trabajador accidentado carecía de la capacitación pertinente para desarrollar su labor. La existencia de dicho procedimiento es fundamental para prevenir a los*



trabajadores de la ocurrencia de accidentes, por cuanto en él se fija una matriz de los riesgos previstos para cada faena, instruyendo directrices o indicaciones de conducta apropiadas para ejecutar labores de manera segura (...). En este mismo sentido, la capacitación que debe realizarse acerca de este protocolo, es un proceso formal, que debe llevarse a cabo de manera pretérita a la asignación de tareas, para garantizar que el trabajador dispone de información suficiente para adoptar decisiones adecuadas conforme a las labores que se le encomiendan. Ambas omisiones provocaron la indefensión del trabajador, puesto que (...) ignoraba la forma correcta de realizar su trabajo. No se cuenta con estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar las tareas y movimientos de carga. La existencia de dichos mecanismos de control pudo contribuir eficazmente a salvaguardar su integridad física (...). Que de los antecedentes del sumario queda establecido que la sumariada ha infringido las disposiciones de los artículos 3 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D.S. 549/99 del Ministerio de Salud". Por dichos motivos, la autoridad en cuestión aplicó en dicha resolución, a Maestranza Joma S.A., una multa de 200 unidades tributarias mensuales.

D) Que, presentada con fecha 5 de abril de 2018, por parte de la sumariada, un recurso administrativo de reposición contra la resolución señalada precedentemente, la autoridad sanitaria en referencia decidió, en resolución exenta N° 5293, de fecha 30 de julio de 2018, "Que la parte sumariada no acompaña antecedentes ni medios probatorios, que sustenten sus dichos en cuanto a las acciones de capacitación y prevención, especialmente en



lo que dice relación con las acciones realizadas antes de producirse el accidente, como asimismo, no acredita de forma alguna el procedimiento de trabajo seguro para el movimiento de vigas doble T, lo cual fue determinante, puesto que el trabajador carecía de capacitación para desarrollar esa labor y (...) tal procedimiento resultaba fundamental para prevenir a los trabajadores de la ocurrencia de accidentes”, resolviendo, en definitiva, que se desestima la reposición mencionada y se ratifica la sentencia administrativa N° 1988 de 15 de marzo de 2018, pronunciada por la misma autoridad sanitaria.

DECIMOCUARTO: Que, en cuanto a las atribuciones de fiscalización radicadas en la órbita de competencia de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que instruyó el sumario cuya decisión se impugna en estos autos, órgano dependiente del Ministerio de Salud. Al respecto, según dispone el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud, publicado el 24 de abril de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.496, “*Al Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud. En consecuencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones*”, de las cuales interesa para la resolución de la Litis aquella señalada en el N° 3 de dicho artículo, esto es, “*Velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud. La fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, laboratorios y farmacias, será efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, sin perjuicio de la competencia que la ley asigne a otros organismos*”.



Foja: 1

Por su parte, el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley mencionado, dispone que *“Habrá una Secretaría Regional Ministerial de Salud en cada una de las Regiones en que se divide administrativamente el país, a cargo de un Secretario Regional Ministerial, sin perjuicio de las oficinas provinciales que pudieran requerirse”*, mientras que el artículo 12 del mismo cuerpo normativo establece que *“Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud tendrán las siguientes funciones, de acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud”*, de las cuales resulta pertinente para la resolución de la Litis aquella señalada en el N° 2 del mismo artículo, a saber, *“Ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren, de conformidad con lo previsto en el artículo 13”*.

A su turno, como las normas del Código Sanitario aplicables al caso *sub lite* se refieren al Servicio Nacional de Salud, cabe hacer presente que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley en mención, *“Serán de la competencia del Ministerio de Salud, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, todas aquellas materias que corresponden a los Servicios de Salud, sea en calidad de funciones propias o en su carácter de sucesores legales del Servicio Nacional de Salud y del Servicio Médico Nacional de Empleados, y que no digan relación con la ejecución de acciones integradas de carácter asistencial en salud, sin perjuicio de la ejecución de acciones de salud pública conforme al número 4 del artículo anterior”*.



Foja: 1

Por otro lado, el artículo 190 del Código del Trabajo dispone expresamente que *“Los Servicios de Salud fijarán en cada caso las reformas o medidas mínimas de higiene y seguridad que los trabajos y la salud de los trabajadores aconsejen. Para este efecto podrán disponer que funcionarios competentes visiten los establecimientos y faenas respectivos en las horas y oportunidades que estimen conveniente, y fijarán el plazo dentro del cual deben efectuarse esas reformas o medidas. Dicha visita podrá motivarse, también, en una denuncia realizada por cualquier persona que informe de la existencia de un hecho o circunstancia que ponga en grave riesgo la salud de los trabajadores”*.

DECIMOQUINTO: Que, a su turno, el artículo 171 del Código Sanitario establece en su inciso segundo que *“El tribunal desechará la reclamación (judicial) si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida”*, lo que significa, a contrario sensu, que las condiciones o requisitos para acoger el presente reclamo judicial, son, copulativamente, las siguientes: que los hechos que hayan motivado la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario, de acuerdo con las normas del Código Sanitario; que tales hechos no constituyan una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios; y que la sanción aplicada no corresponda a la infracción cometida.

DECIMOSEXTO: Que, por otro lado, los preceptos que la autoridad sanitaria estimó infringidos en la especie por la reclamante, corresponden a los artículos 3 y 37 del Decreto Supremo N° 594, del año 1999, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Al respecto, el artículo 3 de dicha norma reglamentaria establece que *“La empresa está obligada a mantener en los lugares*



Foja: 1

de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella”; y, a su turno, el artículo 37 del mismo reglamento prescribe, en lo pertinente, que “Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores”.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en definitiva, la pretensión de la actora se dirige a obtener la ineficacia o el aminoramiento de la sanción administrativa impuesta contra ella por la autoridad competente, porque, en su opinión, la fundamentación de dicha decisión de la autoridad sanitaria es parcial y errónea: (a) parcial, por cuanto no habría considerado ni ponderado los antecedentes aportados al momento de la visita de fiscalización y al momento de los descargos formulados en el sumario instruido; y (b) errónea, por cuanto adolecería de errores de apreciación, al basarse solo en el acta de fiscalización y no considerar –en su concepto-, las capacitaciones e inducciones efectuadas al trabajador accidentado, como tampoco la conducta negligente que habría desplegado el trabajador y que lo habría expuesto imprudentemente al daño.

Sobre el particular, el tribunal advierte que las alegaciones anteriores inciden en el denominado requisito de “motivación” del acto administrativo, sobre el cual debe hacerse presente que *“la explicitación del motivo de hecho y de los fundamentos de derecho que justifican el acto administrativo constituye la ‘motivación’ del acto administrativo. Por ello, cuando la ley exige que un acto sea fundado, quiere ello decir que requiere estar motivado, esto es, que deben señalar los hechos y fundamentos [de derecho] en que se sustentan. El motivo, incorporado al acto, adopta el nombre de ‘motivación’ que fundamente la causa, el motivo y el objeto de la decisión, expresados formalmente. La ausencia de la expresión de las motivaciones*



Foja: 1

conduce a la ilegalidad del acto administrativo, al atentar contra la seguridad jurídica de las personas y la protección de la confianza legítima que ellos tienen en que sus solicitudes serán consideradas razonablemente por la Administración”, mientras que, en cuanto a lo arbitrario, “si arbitrariedad indica voluntad no gobernada por la razón, significa un acto o una omisión carente de razonabilidad; lo razonable da necesariamente idea de rectitud (...), proporcionado, equilibrado, justo; lo razonable, pues, significa lo conforme a razón, un uso proporcionado de los medios para obtener un fin” (Claudio Moraga Klenner, “Notas al Procedimiento Administrativo y la Doctrina Chilena”, en “Derecho Administrativo. 150 años de doctrina”, escrito por Rolando Pantoja Bauzá, Editorial Jurídica, año 2012, páginas 349 y siguientes).

Así las cosas, analizados los antecedentes del caso, y especialmente en virtud de los hechos que resultaron comprobados en el basamento decimotercero, el tribunal estima que la sentencia administrativa contenida en la resolución exenta N° 1988 de fecha 15 de marzo de 2018, dictada por la autoridad reclamada, cumple con el requisito de motivación señalado, dado que efectivamente ponderó los antecedentes y documentos aportados por la reclamante al sumario instruido contra ella, y sobre la base de éstos y del acta de fiscalización, dispuso *“Que, analizadas debidamente las alegaciones efectuadas y los elementos de convicción allegados a este expediente, esta Autoridad Sanitaria concluye que la sumariada no logra desvirtuar los cargos formulados para eximirse de la responsabilidad que le cabe en los hechos materia de este sumario, toda vez que: No se acredita Procedimiento de Trabajo Seguro para el movimiento de vigas doble T y, consecuentemente, el trabajador accidentado carecía de la capacitación pertinente para desarrollar su labor. La existencia de dicho procedimiento es fundamental para prevenir a los trabajadores de la ocurrencia de accidentes, por cuanto en él se fija una matriz de los riesgos previstos para cada faena, instruyendo directrices o indicaciones de conducta apropiadas para ejecutar labores de manera*



Foja: 1

segura (...). En este mismo sentido, la capacitación que debe realizarse acerca de este protocolo, es un proceso formal, que debe llevarse a cabo de manera pretérita a la asignación de tareas, para garantizar que el trabajador dispone de información suficiente para adoptar decisiones adecuadas conforme a las labores que se le encomiendan. Ambas omisiones provocaron la indefensión del trabajador, puesto que (...) ignoraba la forma correcta de realizar su trabajo. No se cuenta con estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar las tareas y movimientos de carga. La existencia de dichos mecanismos de control pudo contribuir eficazmente a salvaguardar su integridad física (...). Que de los antecedentes del sumario queda establecido que la sumariada ha infringido las disposiciones de los artículos 3 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D.S. 549/99 del Ministerio de Salud”.

Por otra parte, la resolución exenta N° 5293, de fecha 30 de julio de 2018, que desestimó la reposición administrativa presentada por la sumariada y confirmó la multa impuesta a ésta, dispuso, en lo pertinente, *“Que la parte sumariada no acompaña antecedentes ni medios probatorios, que sustenten sus dichos en cuanto a las acciones de capacitación y prevención, especialmente en lo que dice relación con las acciones realizadas antes de producirse el accidente, como asimismo, no acredita de forma alguna el procedimiento de trabajo seguro para el movimiento de vigas doble T, lo cual fue determinante, puesto que el trabajador carecía de capacitación para desarrollar esa labor y (...) tal procedimiento resultaba fundamental para prevenir a los trabajadores de la ocurrencia de accidentes”.*

Es decir, ambas decisiones administrativas en cuestión, se encuentran debidamente motivadas, en virtud del mismo razonamiento contenido en ella, esto es, que la inexistencia del procedimiento de trabajo seguro sobre movimiento de “vigas doble T” y las demás acciones que indica, omitidas por la sumariada, constituyen la



Foja: 1

infracción reglamentaria establecida en dicha sentencia, la que, a su vez, motiva la multa impuesta a la sumariada.

DECIMOCTAVO: Que, por otro lado, ha quedado demostrado en el motivo decimotercero, que, al formular sus descargos en el sumario administrativo *sub lite*, MAESTRANZA JOMA S.A. acompañó a su presentación, en lo pertinente, los siguientes documentos, todos ellos contenidos dentro de la instrumental referida en el apartado duodécimo, no objetada por la reclamante, a saber:

a) Seis hojas de registro de asistencia a charlas integrales, de fechas, respectivamente, 4 de septiembre de 2017, 7 de agosto de 2017, 31 de julio de 2017, 18 de julio de 2017, 12 de junio de 2017 y 22 de mayo de 2017, todas las cuales indican la asistencia del trabajador Sergio Sepúlveda, trabajador accidentado. Sin embargo, las fechas de dichos registros de asistencia, no coinciden con la que consignan las actas de charla integral a las que acompañan, las cuales se encuentran datadas, respectivamente, los días 1 de septiembre de 2017, 6 de agosto de 2017, 1 de agosto de 2017, 10 de julio de 2017, 5 de junio de 2017 y 29 de mayo de 2017;

b) Quince actas de “charla integral” y quince hojas de asistencia que las acompañan y que indican la asistencia del trabajador Sergio Sepúlveda; todas ellas, respectivamente –tanto las actas como las hojas de asistencia-, de fechas 2 de octubre de 2017, 14 de agosto de 2017, 24 de julio de 2017, 10 de julio de 2017, 3 de julio de 2017, 5 de junio de 2017, 27 de junio de 2017, 19 de junio de 2017, 15 de mayo de 2017, 17 de abril de 2017, 10 de abril de 2017, 3 de abril de 2017, 20 de marzo de 2017, 15 de marzo de 2017 y 13 de marzo de 2017. En dichas actas de “charla integral”, a las que asistió el trabajador en cuestión, en las fechas señaladas, se trataron, en lo pertinente, temas relativos a no transitar por debajo de las cargas suspendidas de grúas horquilla y a que todo movimiento de los puente grúas se debe realizar con el máximo de precaución para evitar golpes y daños a terceros;



Foja: 1

c) Un certificado de desarrollo de capacitación ocupacional emitido por Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, relativo a que el trabajador Sergio Sepúlveda Salinas participó en un curso de capacitación en prevención de riesgos en la operación de grúas horquilla o maquinaria pesada, llevado a cabo en dependencias de Maestranza Joma S.A. el 2 de septiembre de 2017, cuya duración fue de dos horas hombre instrucción, y cuyo resultado para el trabajador fue “aprobado”; y

d) Un set de 28 páginas, relativo a documentos referentes a la obligación de informar respecto del trabajador accidentado, derecho a saber del trabajador accidentado y charlas diarias de 5 minutos.

Al respecto, del análisis del contenido de dichos documentos inobjutados, que fueron incorporados por la reclamante al sumario administrativo de marras, y de las demás pruebas incorporadas al proceso, no se advierte, en forma suficiente, la efectividad de haberse efectuado los procedimientos de seguridad que la autoridad sanitaria estimó omitidos por la reclamante, toda vez que no dan cuenta, en forma concreta, de haber realizado al trabajador accidentado, un procedimiento de trabajo seguro para el movimiento de “vigas doble T”, como tampoco, del hecho de contar con un estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar los movimientos de carga, sino que se refieren a capacitaciones, charlas e inducciones de carácter general sobre las labores a efectuar por el trabajador, pues, como ya se dijo en este apartado y se estableció en el literal (B) del basamento decimotercero, dichas capacitaciones y charlas se refieren a temas relativos a no transitar por debajo de las cargas suspendidas de grúas horquilla y a que todo movimiento de los puente grúas se debe realizar con el máximo de precaución para evitar golpes y daños a terceros, además del curso de capacitación de capacitación en prevención de riesgos en la operación de grúas horquilla o maquinaria pesada, aprobado por el trabajador. Por tales motivos, según se comprobó en los literales (C) y (D) del apartado



Foja: 1

decimotercero y en el motivo decimoséptimo, la resolución exenta N° 1988 de fecha 15 de marzo de 2018 estableció, fundadamente, que *“No se acredita Procedimiento de Trabajo Seguro para el movimiento de vigas y, consecuentemente, el trabajador accidentado carecía de la capacitación pertinente para desarrollar su labor”, y que “No se cuenta con estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar las tareas y movimientos de carga”, y, del mismo modo, en atención a la insuficiencia probatoria de la sumariada, la resolución exenta N° 5293 de fecha 30 de julio de 2018 dispuso “Que la parte sumariada no acompaña antecedentes ni medios probatorios, que sustenten sus dichos en cuanto a las acciones de capacitación y prevención (...) en lo que dice relación con las acciones realizadas antes de producirse el accidente, como asimismo, no acredita de forma alguna el procedimiento de trabajo seguro para el movimiento de vigas doble T, lo cual fue determinante (...)”* en el accidente de marras.

A mayor abundamiento, de las restantes probanzas incorporadas al pleito, no se advierten elementos de convicción que permitan establecer, de manera suficiente y fundada, que la compañía reclamante hubiere adoptado las medidas de seguridad, prevención y capacitación cuya omisión fue establecida por la autoridad sanitaria en las resoluciones impugnadas, esto es, medidas de seguridad, prevención y capacitación en las labores relativas al movimiento de “vigas doble T” –elemento que causó la lesión física del trabajador- y en cuanto a la señalización o comunicación no verbal para coordinar movimientos de carga de estructuras pesadas.

DECIMONOVENO: Que, en virtud de lo razonado en los apartados decimoséptimo y decimoctavo, el tribunal desestimaré la alegación principal de la reclamante, en orden a que las decisiones administrativas impugnadas en autos, tienen, en su concepto, una fundamentación parcial y errónea. Al contrario, dichos actos administrativos contienen suficiente motivación y estimaron



Foja: 1

procedente el establecimiento de la infracción de los preceptos reglamentarios que indican por parte de la sumariada, como asimismo la imposición de la multa reclamada por ésta, dado que, tal como se acreditó en estos autos, en virtud de lo establecido en el literal (B) del fundamento decimotercero y en el basamento decimoctavo, las capacitaciones, charlas, inducciones y medidas de seguridad adoptadas por la reclamante, no se refieren a lo que precisamente exigió la autoridad sanitaria, a saber, un procedimiento de trabajo seguro en materia de movimiento de “vigas doble T” y un estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar labores de carga de estructuras pesadas.

A mayor abundamiento, el propio testigo de la reclamante, Sr. Alex Navarro, preguntado sobre e qué documento físico le consta la existencia de un procedimiento de trabajo para el movimiento de “vigas doble T”, respondió que el procedimiento del derecho a saber, más las operaciones en terreno durante el entrenamiento del trabajador, son de carácter genérico, realizándosele posteriormente, por sugerencia del departamento de prevención, un procedimiento específico para el movimiento de dicho tipo de vigas. Sin embargo, como ya se señaló en este apartado, de los antecedentes del pleito no se advierte la existencia de las medidas de capacitación y prevención exigidas por la autoridad y referidas a tal clase de vigas.

VIGÉSIMO: Que por otro lado, en cuanto a la alegación de la reclamante referida a que el accidente se produjo por negligencia del trabajador accidentado, de las pruebas aportadas al proceso, no se desprenden elementos de juicio que permitan suficientemente establecer la efectividad de dicha aseveración.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, así las cosas, en virtud de lo expuesto y razonado en los numerales decimoséptimo, decimoctavo y vigésimo, y de acuerdo con lo solicitado en el petitorio del reclamo, corresponderá acoger parcialmente la reclamación entablada



Foja: 1

subsidiariamente, en el sentido de rebajar la multa impuesta en la resolución administrativa que se impugna en autos, a un 75% del monto original de dicha multa, esto es, rebajarla a la cantidad de 150 unidades tributarias mensuales, por cuanto, si bien es efectiva la realización de charlas, inducciones y capacitaciones al trabajador accidentado, como también la existencia de medidas de seguridad y prevención adoptadas por la reclamante respecto del mismo, dichas medidas se refieren en general a las funciones a desarrollar por el trabajador, y, por otro lado, no ha resultado acreditada en este juicio, la efectividad de las acciones y medidas que la autoridad sanitaria echa de menos en las resoluciones impugnadas en esta sede, esto es, el procedimiento de trabajo seguro para movimiento de “vigas doble T” y el estándar de señalización o comunicación no verbal para coordinar labores de carga.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a las alegaciones de la reclamada, referidas a que la defensa de la reclamante no desvirtúa la existencia de las infracciones comprobadas, que la carga probatoria corresponde en estos autos a la reclamante, que la sentencia fue dictada con base en los antecedentes aportados al sumario y que la sanción aplicada corresponde a la infracción declarada y resulta proporcional a ella, corresponderá estarse a lo decidido en el fundamento anterior.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de la reclamada, relativa a que este tribunal carece de competencia para dejar sin efecto o modificar el acto administrativo sancionatorio por ser ello parte de la discrecionalidad administrativa, es necesario señalar que el artículo 171 del Código Sanitario solo consagra el derecho de los administrados en el sentido de poder ejercer una acción ante la justicia ordinaria, para reclamar de las sanciones aplicadas por la autoridad sanitaria, estableciendo además, las condiciones para que el tribunal deseche o desestime la reclamación, pero en ninguna parte de dicho precepto se regula el contenido de la reclamación judicial del



Foja: 1

administrado, como tampoco el de la sentencia judicial que al efecto se pronuncie, es decir, si puede o no versar sobre una rebaja de la multa impuesta como sanción administrativa, razones por las cuales procederá desestimar esta alegación de la reclamada.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a las costas, el artículo 144 del Código del ramo contempla dicha condena para la parte que haya resultado totalmente vencida, lo que no ocurre en la especie con la reclamada, en virtud de lo decidido en el numeral vigésimo primero, motivo por el cual se desestimaré esta petición de la reclamante.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los preceptos legales y reglamentarios citados por las partes y en esta sentencia; y los artículos 160, 170, 253 y siguientes, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, 432, 433, y 680 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, **se resuelve:**

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:

A) Que se desestima, con costas, la tacha opuesta por la reclamada contra el testigo de la reclamante, don Alex Navarro Toledo, fundada en la causal del N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, según lo dispuesto en el motivo tercero.

B) Que se desestima, con costas, la tacha opuesta por la reclamada contra el testigo de la reclamante, don Diego González Ortega, fundada en la causal del N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, según lo establecido en el numeral sexto.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

C) Que se desestima la petición principal del reclamo interpuesto.

D) Que, se acoge parcialmente la petición subsidiaria, de acuerdo con lo decidido en el fundamento vigésimo primero, y, en



Foja: 1

consecuencia, se desestima la petición principal y, respecto a la petición subsidiaria, se rebaja la multa impuesta a la reclamante en la resolución impugnada en estos autos, a la cantidad de 150 unidades tributarias mensuales.

E) Que se desestima la petición subsidiaria, en todo lo demás.

F) Que no se condena en costas a la reclamada, en atención a lo dispuesto en el apartado vigésimo cuarto.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívense estos antecedentes.

Rol C-27.054-2018

**PRONUNCIADA POR DOÑA SUSANA RODRÍGUEZ MUÑOZ,
JUEZA.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecinueve de Agosto de dos mil diecinueve**



